

ECONOMÍA / POLÍTICA

Solo 11.000 de los 48.700 millones de la UE movilizados llegan a la economía real

PLAN DE RECUPERACIÓN/ La Administración General del Estado ha comprometido 29.145 millones de euros de las ayudas europeas y ha transferido a las comunidades autónomas otros 19.575 millones, pero solo el 22,6% ha sido desembolsado.

Juande Portillo, Madrid

España ha logrado imprimir una fuerte aceleración a la ejecución de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación durante el ejercicio 2022, que concluye con la movilización presupuestaria acumulada de 48.700 millones de euros comunitarios entre licitaciones estatales y transferencias de fondos a las comunidades autónomas. De esta cuantía, sin embargo, solo unos 11.000 millones de euros de gestión estatal habrían llegado ya a la economía real, según el último informe del *Observatorio NextGen* elaborado por Llorente y Cuenca (LLYC), al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

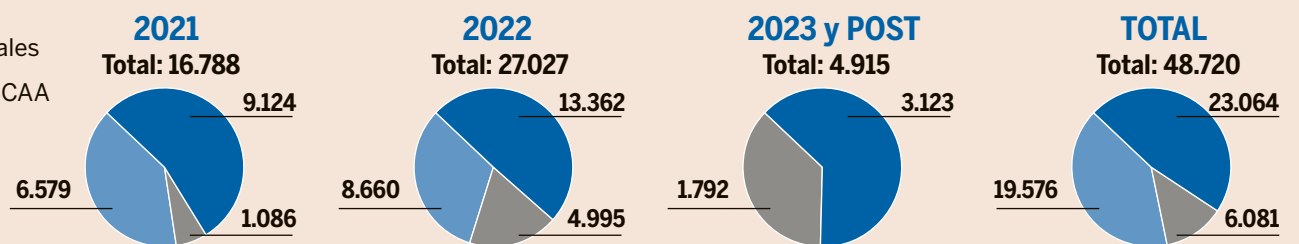
El documento, titulado *El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente, balance de la ejecución de los fondos Next Generation EU en España y perspectivas para 2023*, destaca que “2022 ha venido marcado por una gran aceleración del compromiso de fondos”, movilizándose 10.229 millones más que en 2021 al duplicar el volumen de subvenciones y quintuplicar el de licitaciones. A partir de ahí, detalla, de los 48.720 millones de euros comprometidos presupuestariamente en los dos últimos ejercicios, la Administración General del Estado (AGE) ha gestionado directamente

RADIOGRAFÍA DE LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

Nivel de compromiso de fondos Next Generation

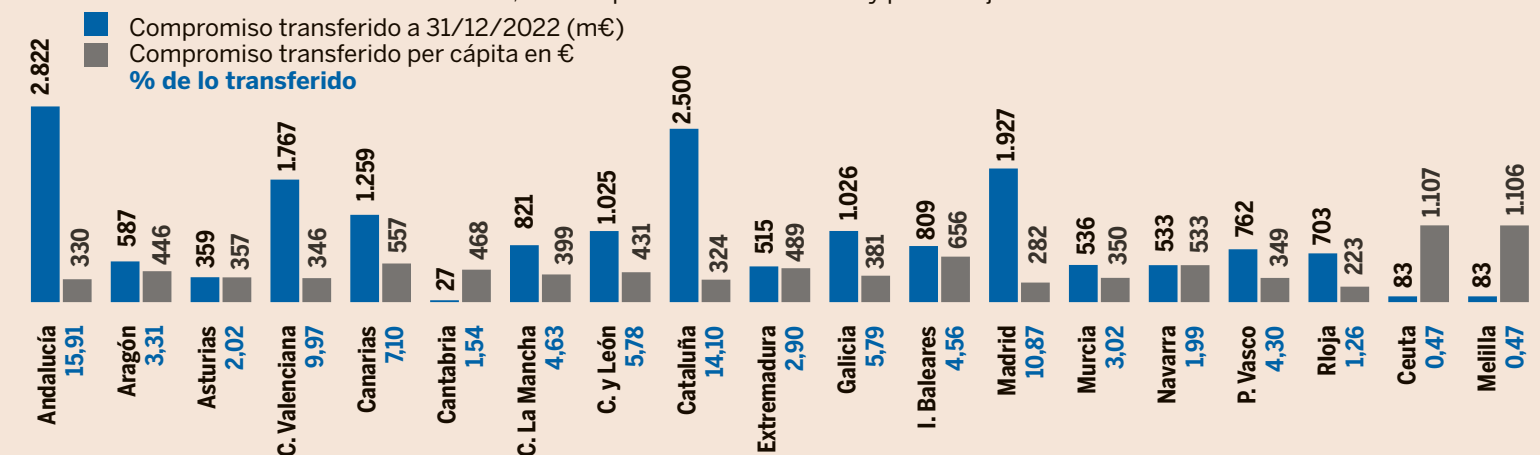
En millones de euros.

- Convocatorias estatales
- Transferencia a las CCAA
- Licitaciones



Distribución de transferencias del Plan de Recuperación por CCAA

Transferencias recibidas en millones de euros, cuantía por habitante en euros y porcentaje sobre el total.



Expansión

Fuente: Llorente y Cuenca

29.145 millones y las comunidades autónomas otros 19.575 millones.

Sin embargo, destaca el documento elaborado bajo la dirección de la exdirectiva de la OCDE Paloma Baena, responsable de European Affairs de LLYC, el ritmo de adjudicaciones resueltas ha caído casi a la mitad, en parte porque la “participación de las empresas en convocatorias y licitaciones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia ha ido a la baja a medida que se ha desarrollado la ejecución”, con el “ejem-

plo destacado en la escasa concurrencia registrada en el Perte del vehículo eléctrico (VEC), que solo logró adjudicar unos 800 millones de euros de los casi 3.000 presupuestados”.

Como resultado, estima el informe, “de los fondos ges-

tionados directamente por la Administración General del Estado habrían llegado a la economía real unos 11.000 millones de euros, a través de las convocatorias de subvenciones y licitaciones estatales ya resueltas, es decir, un 37,7% del total de fondos”

gestionados por el Estado central y “un 22,6% de los fondos totales comprometidos”.

Así, dice el texto, de los 23.064 millones comprometidos por la Administración central para convocatorias de ayudas, solo se han resuelto procesos por la mitad del

Madrid y Cataluña reciben unos 300 euros por habitante

J. Portillo, Madrid

El despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prometía dar un papel protagonista a las comunidades autónomas, a las que se transfieren cerca de la mitad de las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, lo que generó “unas expectativas iniciales” que “finalmente no se vieron correspondidas por la realidad”, asevera el último *Observatorio NextGen* de Llorente y Cuenca (LLYC), que concluye que en aras de unificar compromisos y acelerar la ejecución las decisio-

nes se han dejado en manos del Gobierno central.

Más allá, el análisis destaca que pese a que las regiones han recibido ya transferencias estatales por unos 19.575 millones de euros, el reparto de fondos ha resultado muy dispar y facilita la emisión de quejas desde distintos territorios en cuanto al volumen recibido o la asignación proporcional que se les ha facilitado.

Los proyectos de rehabilitación residencial son los que más fondos de la UE han recibido

Después de todo, destaca el documento de LLYC, “las comunidades autónomas que menos transferencias de fondos han recibido por habitante son Madrid [282 euros por vecino], Cataluña [324 euros], Andalucía [330 euros] y la Comunidad Valenciana [346 euros], aunque en volumen han sido justamente estas las comunidades con mayores transferencias en este orden: Andalucía [2.822 millones], Cataluña [2.500 millones], Madrid [1.927 millones] y la Comunidad Valenciana [1.767 millones]”.

Por destino final de las inversiones, el documento se-

ñala que los principales proyectos autonómicos financiados con fondos europeos han sido: los dirigidos a la instalación de puntos de recarga y adquisición de vehículos eléctricos y de H2 (694 millones entre 2021 y 2022); rehabilitación en entornos residenciales (2.540 millones); construcción de viviendas en alquiler social energéticamente eficientes (500 millones); autoconsumo y energías renovables integradas en la edificación y los procesos productivos (1.076 millones); y el almacenamiento energético (209 millones).

De cara al futuro, la agenda del Plan de Recuperación que el Gobierno última para solicitar otros 94.300 millones de euros en transferencias no reembolsables y créditos blandos, adicionales a los 69.500 millones en ayudas directas ya asignados a España, incluye la creación de un nuevo fondo de inversiones sostenibles de las comunidades autónomas con

Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son las regiones que más ayudas ingresan

una dotación de 20.000 millones de euros en préstamos e instrumentos financieros como avales y participaciones de capital. El objetivo es facilitar financiación al sector privado para que ejecute inversiones en los ámbitos de la vivienda social, movilidad sostenible o competitividad, fundamentalmente.

En cuanto al ritmo de ejecución de las distintas comunidades, LLYC echa en falta “una cierta estandarización a la hora de ofrecer los datos de gestión” que permita contar con información actualizada y comparable.